DOCUMENTO A/CONF.62/48

Carta, de fecha 10 de septiembre de 1976, dirigida al Presidente de la Conferencia por el representante de los Países Bajos

[Original: francés/inglés]
[14 de septiembre de 1976]

En mi calidad de representante del Estado a cuyo cargo está actualmente la Presidencia del Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas, deseo señalar a su atención la necesidad de que la futura convención sobre el derecho del mar contenga disposiciones apropiadas para que la Comunidad Económica Europea pueda pasar a ser parte contratante en la convención. En vista de la importancia de esta cuestión, le agradecería tenga a bien disponer la distribución de la presente carta como documento oficial.

En lo que respecta a la información general concerniente a la Comunidad, puede hacerse referencia al directorio anotado de organizaciones intergubernamentales que se ocupan de asuntos oceánicos, preparado por la Secretaría de las Naciones Unidas (A/CONF.62/L.14), que contiene un breve resumen de la naturaleza, la estructura y los poderes y funciones pertinentes de la Comunidad. Cabe recordar, no obstante, que, desde su creación por el Tratado de Roma, de 25 de marzo de 1957, y su ampliación en 1973, la Comunidad Económica Europea está integrada por nueve Estados, todos ellos participantes en la Conferencia, a saber: Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, el Reino Unido y la República Federal de Alemania, que están llevando a cabo un proceso de integración regional.

Esta Comunidad, que está abierta a la adhesión de otros Estados europeos, tiene como tarea la constitución de un mercado común, lo cual entraña la abolición de toda res-

tricción a los intercambios entre sus miembros, protegido por medio de un arancel aduanero común. Por otra parte, la Comunidad pone en práctica políticas y normas comunes en ciertas esferas, como el comercio exterior, la agricultura y ganadería, las pesquerías y el transporte.

Para lograr esos objetivos, los Estados miembros han convenido en traspasar algunas de sus competencias a las instituciones de la Comunidad. Por ello, hay distintas esferas en que la competencia de la Comunidad ha sustituido a la de los Estados miembros.

En esas esferas, el traspaso de competencias se aplica asimismo a las relaciones exteriores de la Comunidad con terceros Estados. A este respecto, la Comunidad ha concertado acuerdos con un número muy grande de Estados representados en la Conferencia, acuerdos relativos al comercio, o acuerdos de asociación o cooperación que van mucho más lejos que los simples acuerdos comerciales, como ejemplo de los cuales cabe mencionar la Convención de Lomé, firmada en febrero de 1975 con cerca de 50 Estados de Africa, del Caribe y del Pacífico.

Como se recuerda en el estudio preparado por el Secretario General respecto del preámbulo y las cláusulas finales (A/CONF.62/L.13), la Comunidad es además parte o reúne las condiciones para pasar a ser parte en varios acuerdos multilaterales de carácter regional (Convenciones de París y de Barcelona sobre la contaminación marina) o de carácter universal (convenios sobre el café, el cacao

y el estaño concertados bajo los auspicios de las Naciones Unidas).

La futura convención sobre el derecho del mar que elabora la Conferencia contendrá a un tiempo disposiciones respecto de las cuales los Estados miembros ejercen competencia y disposiciones relacionadas con asuntos para los cuales la competencia ha sido traspasada por los Estados miembros a la Comunidad. Entre estas últimas disposiciones, cabe señalar aquellas relacionadas con la conservación, la administración y la explotación de los recursos biológicos de la zona económica. A este respecto, la Comunidad emprenderá a breve plazo negociaciones con varios Estados relativas a la concertación de acuerdos sobre pesquerías entre cada uno de ellos y la Comunidad como tal.

En vista del traspaso de competencias, que se ha producido, los Estados miembros de la Comunidad no pueden contraer compromisos respecto de terceros Estados en relación con asuntos sobre los cuales la Comunidad ejerce la competencia. Por consiguiente, es necesario que esos compromisos sean contraídos por la Comunidad, y ello exige que ésta pase a ser parte en la futura convención conjuntamente con sus Estados miembros.

Este sistema de participación conjunta responde, por lo demás, a la legítima preocupación de los terceros Estados de contar con la garantía jurídica de tener ante sí coparticipes que estén en condiciones de cumplir, respecto de ellos, la totalidad de las obligaciones previstas en la convención.

La posibilidad de que la Comunidad pase a ser parte contratante en la convención deberá, por tanto, estar prevista en una cláusula especial. A este respecto, cabe hacer referencia al estudio antes mencionado del Secretario General y a los ejemplos citados en éste (A/CONF.62/L.13).

En la medida en que otras agrupaciones regionales, con arreglo a un proceso análogo al de la Comunidad, ejercen o pueden llegar a ejercer en su propio nombre competencias en algunas de las esferas que abarca la convención, la formulación de tal cláusula podría ser de carácter general, tal como:

“Las uniones aduaneras, las comunidades y otras agrupaciones económicas regionales que ejerzan poderes en las esferas que abarca la presente Convención podrán ser partes en esta Convención.”

También sería posible combinar una formulación de este tipo con otra que se refiera concretamente a la Comunidad Económica Europea, como se ha hecho en el caso de algunos acuerdos concertados anteriormente y a los que se refiere el Secretario General en el documento A/CONF.62/L.13.

Al pasar a ser así parte en la convención, naturalmente la propia Comunidad gozaría de los mismos derechos y estaría sujeta a las mismas obligaciones que los Estados participantes en el instrumento, y las instituciones de la Comunidad tendrían la obligación de aplicar las disposiciones de la convención en el ejercicio de sus competencias. El traslado al nivel de la Comunidad de la responsabilidad de aplicar la convención, o ciertas disposiciones de la misma, dejaría al derecho interno de la Comunidad la tarea de regular las relaciones entre los Estados miembros en las regiones de que se trate. Para que esto quede explícito en la convención, podría incluirse la cláusula siguiente:

“Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que los Estados miembros de tales uniones aduaneras, comunidades u otras agrupaciones económicas regionales apliquen, con arreglo a las normas que rijan tales uniones aduaneras, comunidades u otras agrupaciones económicas regionales, las disposiciones relativas a la concesión mutua a los nacionales de tales Estados del tratamiento nacional o cualquier otro tratamiento especial.”

La presente comunicación tiene por objeto notificarle oficialmente de la necesidad de que se incluyan disposiciones apropiadas que permitan a la Comunidad participar en la futura convención, juntamente con sus Estados miembros, y sugerir la forma en que las cláusulas finales podrían tener en cuenta dicha necesidad. En otras partes del texto quizás se presenten cuestiones adicionales (por ejemplo en lo relativo a la aplicación de la parte IV, relativa al arreglo de controversias¹), a las que será necesario prestar atención oportunamente.

(Firmado) W. RIPHAGEN
Jefe de la delegación de los Países Bajos
ante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar

¹ Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. V (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.76.V.8), documento A/CONF.62/WP.9/Rev.1.